



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	OCTAVIO BUITRAGO VILLA
DEMANDADAS	MARIO ALBERTO TOBÓN RÍOS Y BEATRIZ ELENA VELÁSQUEZ
LIITISCONSORTE NECESARIO	COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL DE DOBLE INSTANCIA
RADICADO NACIONAL	050013105003201800679-01
RADICADO INTERNO	330-22
ASUNTO	AUTO NIEGA NULIDAD
DECISIÓN	REVOCA AUTO, DECLARA NULIDAD DE LO ACTUADO

En la fecha indicada, procede la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a decidir de fondo el recurso de apelación formulado contra el auto del 15 de julio de 2022<sup>1</sup>, mediante el cual se denegó la nulidad de lo actuado a partir de la fijación del litigio realizada el 18 de febrero de 2022.

ANTECEDENTES

En lo que interesa a la Sala en esta oportunidad, se tiene que el señor Octavio Buitrago Villa presentó demanda ordinaria laboral de doble instancia en contra de Mario Alberto Tobón Ríos y Beatriz Elena Velásquez a efectos de que se declare la existencia del contrato de trabajo entre el 08 de marzo de 2006 y el 31 de octubre de 2016 y consecuentemente se condene a los demandados al pago de los derechos sociales como cesantías, intereses a las cesantías, sanción por no pago de los intereses, primas de servicio, vacaciones, al reajuste de los salarios al mínimo legal, las sanciones moratorias por la no consignación y pago de las cesantías, la sanción moratoria por el no pago de las prestaciones sociales, al pago de las horas extras, de los dominicales y festivos, los aportes a la seguridad social, la corrección moratoria y las costas.

La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, el 02 de octubre de 2018<sup>2</sup>, se notificó a los demandados el 26 de octubre de 2018<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> 01PrimerInstancia, 51ResuelveNulidad

<sup>2</sup> 01PrimerInstancia, 02ExpedienteDigital, pág. 20

<sup>3</sup> 01PrimerInstancia, 02ExpedienteDigital, pág. 21/22

quienes presentaron contestación a través de apoderada judicial el 13 de noviembre de 2018<sup>4</sup>, razón por la cual el juzgado procedió a fijar fecha para la audiencia de que trata el artículo 77 del CPLSS para el día 22 de abril de 2020 a las 11:00 am,<sup>5</sup> audiencia que fue reprogramada mediante auto del 03 de febrero de 2021<sup>6</sup> para el día 15 de febrero de ese mismo año a las 8:30 am.

Efectuada la audiencia del artículo 77 del CPLSS en la fecha fijada, se evacuaron efectivamente las etapas de la diligencia fijándose como fecha para realizar la diligencia de trámite y juzgamiento el día 18 de mayo de 2022 a las 9:00 am, fecha que mediante auto del 26 de julio de 2021,<sup>7</sup> fue reprogramada para el 17 de noviembre de 2021 a las 11:00 am., fecha en la cual en lugar de emitirse sentencia se ordenó integrar a Colpensiones en calidad de Litis consorte necesario por pasiva.<sup>8</sup>

Integrada en debida forma la Litis con la entidad integrada por pasiva, mediante auto del 17 de enero de 2022<sup>9</sup>, se procedió nuevamente fecha para audiencia de los artículos 77 y 80 del CPTSS el día 18 de febrero de 2022 a la 1:30 pm.

Mediante correo electrónico remitido al Buzón del despacho de instancia, la parte demandada el día 14 de febrero de 2022<sup>10</sup> informó los correos electrónicos de los testigos<sup>11</sup>; efectuándose la diligencia programada el día 18 de febrero de 2022 a la 1:30 pm, sin la comparecencia de la parte demandada.

El 08 de marzo de 2022<sup>12</sup> la parte demandada allegó correo electrónico con solicitud de nulidad<sup>13</sup> de todo lo actuado a partir de la fijación del litigio efectuada el 18 de febrero de 2022, aduciendo que no le fue posible acceder a la diligencia, así como tampoco le fue posible a los testigos o demandados y pese a haber llamado al Despacho o enviado correos electrónicos, preguntando por la diligencia, no obtuvo respuesta.

La solicitud de nulidad fue denegada mediante auto del 15 de julio de 2022<sup>14</sup> expresando como fundamento de su decisión que con posterioridad a la diligencia del 17 de noviembre de 2021 la apoderada judicial de la pasiva actuó sin alegar nulidad alguna, si la hubo quedó saneada y respecto de la diligencia del 18 de febrero de 2022 adujo que se remitió el correspondiente Link tanto a la parte activa como a la recurrente y a Colpensiones, siendo la demandada la única que no asistió a la diligencia o tuvo problemas, adjuntando al auto el pantallazo del correo mediante el cual remitió el link de la diligencia.

---

<sup>4</sup> 01PrimeralInstancia, 02ExpedienteDigital, pág. 21/22

<sup>5</sup> 01PrimeralInstancia, 02ExpedienteDigital, pág. 57

<sup>6</sup> 01PrimeralInstancia, 03ReprogramaAudiencia

<sup>7</sup> 01PrimeralInstancia, 07ReprogramaFecha

<sup>8</sup> 01PrimeralInstancia, 13ActaOralidadIntegra

<sup>9</sup> 01PrimeralInstancia, 25DaContestadaFecha

<sup>10</sup> 01PrimeralInstancia, 33IngresoMemorial

<sup>11</sup> 01PrimeralInstancia, 34CorreosTestigos

<sup>12</sup> 01PrimeralInstancia, 46IngresoMemorial

<sup>13</sup> 01PrimeralInstancia, 47SolitudNulidad

<sup>14</sup> 01PrimeralInstancia, 51ResuelveNulidad

Aduce que de no haber continuado con la diligencia pese a la inasistencia de la pasiva constituiría una violación al debido proceso para las demás partes y consecuentemente denegó la nulidad.

**RECURSO DE APELACIÓN**

El 25 de julio de 2022<sup>15</sup>, la apoderada de la parte demandada radicó a través de correo electrónico, memorial<sup>16</sup> deprecando la reposición o en subsidio apelación del auto del 15 de julio de 2022, en el cual expuso que:

El despacho en momento alguno realizó pronunciamiento respecto de los correos electrónicos remitido para pedir autorización de ingreso a la diligencia, ni se tuvo en cuenta que en él se indicó el número telefónico al que se intentó establecer comunicación para acceder a la diligencia, sin que tampoco se comunicaran con ella para proteger su derecho de defensa, así como tampoco extendió la invitación a la diligencia a los testigos convocados, por ello solicita se reponga, o revoque en apelación el auto del 15 de julio de 2022 mediante el cual se niega la nulidad de lo actuado a partir del auto que fija el litigio o en su defecto se haga control de fallo condenatorio.

En auto del 29 de agosto de 2022<sup>17</sup> el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín no repuso su decisión de negar la nulidad alegada por la pasiva y concedió el recurso de apelación.

**CONSIDERACIONES**

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del literal B del art.15 del CPTSS y el numeral 6 del art. 65 del referido código.

El artículo 29 de la Constitución Política, desarrolla el principio fundamental del debido proceso como garantía procesal de la cual gozan todas las partes e intervinientes en las actuaciones judiciales y administrativas, comportando los siguientes aspectos:

- a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo;
- b) El derecho al juez natural, identificado este como el funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado

<sup>15</sup> 01PrimeraInstancia, 52CorreoMemorial  
<sup>16</sup> 01PrimeraInstancia, 53RecursoApelación  
<sup>17</sup> 01PrimeraInstancia, 56ResuelveReposicionConcedeApelacion

proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;

d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;

e) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

Ello así, es evidente que una de las principales garantías del debido proceso, es el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial, de ser oída, hacer valer sus razones y argumentos, controvertir, contradecir y objetar las pruebas allegadas en su contra, y solicitar la práctica y valoración de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten.

Consecuente con ello, no cabe duda de que el principio de publicidad es uno de los presupuestos esenciales del derecho a la defensa, pues su finalidad es dar a conocer la actuación adelantada a los particulares directamente afectados. Cabe subrayar que la indebida notificación, de acuerdo con la jurisprudencia, se sustenta en la injusticia que implica adelantar un proceso a espaldas de quien ha debido brindársele la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, o cuando menos de ser oído, notificándolo o emplazándolo debidamente, o asegurando su correcta representación.

En este aspecto vale resaltar que, a partir de la pandemia de la Covid 19, se expidió el Decreto 806 de 2020, el cual se adoptó como legislación permanente mediante la Ley 2213 de 2022, normatividad con la que se implementó el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, además de agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia.

En el caso *sub iudice*, no obstante, obra prueba en el plenario del link de la audiencia que fue remitido a la apoderada de la parte demandada, no se dejó constancia de que el mismo hubiera sido efectivamente recibido por el servidor de destino, así como tampoco obra prueba en el plenario de que se hubiera remitido el link de la diligencia a los demandados o a sus testigos, no obstante, de manera oportuna la togada de la pasiva remitió sus correos electrónicos.

Aunado a lo anterior, se tiene que la parte demandada demuestra haber intentado establecer conexión a la diligencia, presentando inconvenientes para acceder a la misma, intentando según su dicho establecer comunicación telefónica con el Despacho e incluso remitiendo correos electrónicos que no fueron antenados oportunamente, razón por la cual a más de no poder establecer las causas de los inconvenientes tecnológicos que les imposibilitaron el acceso a la diligencia, conllevó a que el A quo realizara la diligencia sin la presencia de los demandados.

En ese contexto, era imperioso garantizar la conectividad de los demandados, su apoderada judicial y sus testigos, procediéndose a la remisión del link correcto de acceso a la diligencia, o brindándoseles la orientación correspondientes para acceder a la misma de manera oportuna, siendo para la Sala evidente la intención de comparecer a la misma, en tanto fueron allegados con anterioridad los correos electrónicos de los testigos y la profesional del derecho, intentó que se le brindara por parte del Despacho solución a sus problemas de conectividad, a fin de evitar las consecuencias procesales de la inasistencia a la diligencia, las cuales en este caso recayeron directamente en los demandados, a quien se itera no se evidencia que se les haya remitido el link o hipervínculo o enlace, encontrándose su apoderada judicial presta a conectarse con ellos, pero sin lograr tal conexión debido a inconvenientes tecnológicos que hoy resulta imposible determinar.

Sobre este particular, en providencia de tutela proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Octavio Augusto Tejeiro Duque, STC7284-2020 Radicación nº 25000-22-13-000-2020-00209-01, del 9 de septiembre de 2020, se indicó:

**...“Entonces, como el «acceso y conocimiento de los medios tecnológicos» a través de los cuales se ha de celebrar la «audiencia virtual» es condición para su realización, la falta de uno o de ambos elementos por el «apoderado judicial de alguno de los extremos procesales», puede ser invocada como causal de «interrupción del proceso». Si dichas circunstancias ocurren y se alegan antes de la vista pública, darán lugar a la «reprogramación» de la sesión, y si a pesar de ellas la «audiencia» se practica, o, son concomitantes a ésta, podrá alegarse la nulidad consagrada en el numeral 3° del artículo 132 del estatuto adjetivo, con el fin de que se repita**

Todo ello, claro está, cuando de acuerdo con las «circunstancias» de cada caso en particular, la ausencia de «acceso y conocimiento tecnológicos» impida la comparecencia del togado a la respectiva audiencia, aspectos que

deberá valorar el juez de conformidad con los criterios antes señalados”  
(negrilla intencional de la Sala)

Ahora bien, conforme al numeral 5 del artículo 133 del Código General del Proceso, el proceso es nulo en todo o en parte cuando *“5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.”*

Por lo anterior, el derecho al debido proceso del extremo pasivo de la relación procesal se vio vulnerado, dado que al agendar de forma virtual las audiencias de conciliación, decisión de excepciones, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas; tramite y juzgamiento, no se remitió el link, enlace, vínculo o hipervínculo a los demandados y testigos, presentando problemas la profesional del derecho de la parte pasiva para acceder con ellos a la diligencia, sin que se le brindara oportuna asistencia por parte del Despacho, no obstante se observa en las pruebas por ella allegadas al plenario que estuvo conectada a una diligencia virtual<sup>18</sup> el 18 de febrero de 2022, que ese mismo día remitió a las 2:23pm y 2:31 pm correos electrónicos<sup>19</sup> solicitando permiso de ingreso a la diligencia anunciando que se había comunicado para tal fin al abonado telefónico 6042625811 sin obtener respuesta, sin evidenciarse respuesta por parte del Despacho o asesoría para la conexión; realizándose de todos modos la diligencia, desconociendo que la justicia virtual, permite mayor flexibilidad frente a la garantía de conectividad de todas las partes, pero que en todo momento se debe garantizar el acceso de las mismas, sin que los problemas tecnológicos sean óbice para acceder al derecho de contradicción y defensa.

Ello así, se encuentra configurada la causal de nulidad, y por tanto la decisión del A quo, de negar la declaratoria de la misma, resulta vulneradora de la garantía del debido proceso que les asiste a todas las partes, sin que resulte plausible el argumento en relación a que declarar la causal de nulidad genera violación al debido proceso para las partes que sí pudieron asistir, en tanto los actos ilegales no atan al juez ni crean derechos adquiridos, debiéndose subsanar la falencia procesal permitiéndosele a todos los intervinientes ejercer su derecho de contradicción y defensa.

Consecuente con lo anterior, se revocará el auto del 15 de julio de 2022 y en su lugar se declara la nulidad de lo actuado a partir de la dirigencia celebrada el 18 de febrero de 2022, para que el A quo proceda a fijar nueva fecha de audiencia en la cual garantice la comparecencia de las partes a efecto de desarrollar las diligencias de que tratan los artículos 77 y 80 del Código Procesal Laboral y de La Seguridad Social.

Sin costas en esta Instancia al haber prosperado el recurso de apelación.

---

<sup>18</sup> 01PrimeraInstancia, 49FotoReunion y 50FotoReunion

<sup>19</sup> 01PrimeraInstancia, 54Anexos

**DECISIÓN DEL TRIBUNAL**

En mérito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL,

**RESUELVE**

**PRIMERO: REVOCAR** el auto del 15 de julio de 2022 mediante el cual se negó a declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la fijación del litigio.

**SEGUNDO:** Se ordena al Juzgado de Instancia fijar nueva fecha de audiencia en la cual garantice la comparecencia de las partes a efecto de desarrollar las diligencias de que tratan los artículos 77 y 80 del Código Procesal Laboral y de La Seguridad Social.

**TERCERO:** Sin costas en esta instancia.

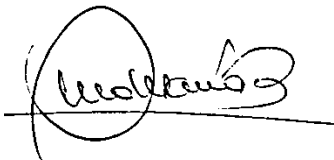
Devuélvase el expediente al Juzgado origen.

La presente decisión se notificará por ESTADOS.

Las Magistradas,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



LILIANA MARIA CASTAÑEDA DUQUE

Certifico que el auto anterior fue notificado por ESTADOS N° 093 fijados hoy 01 de junio de 2023 a las 8:00AM

\_\_\_\_\_

El secretario